

ISSN: 0213-2087 eISSN: 2444-7080
DOI: <https://doi.org/10.14201/shhc2018366387>

CAMPESINOS ANTIECOLÓGICOS. POLÍTICA DE TIERRAS Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN COSTA RICA CONTEMPORÁNEA*

Anti-ecological Peasants. Land Tenure and Forest Conservation Policy in Contemporary Costa Rica

Wilson PICADO-UMAÑA

Escuela de Historia, Universidad Nacional, Costa Rica

wilson.picado.umana@una.cr

<https://orcid.org/0000-0003-3882-1843>

Elisa BOTELLA-RODRÍGUEZ

Universidad de Salamanca, España

ebotella@usal.es

<https://orcid.org/0000-0001-9604-4822>

Recibido: 21/06/2022 Revisado: 01/09/2022 Aceptado: 12/09/2022

RESUMEN: Este artículo examina las relaciones establecidas entre el campesinado, la política de tierras y de conservación de bosques en Costa Rica entre las décadas de 1960 y 1980. Su objetivo es estudiar las contradicciones sociales y ecológicas de dichas políticas en el contexto del auge de la «Reforma agraria» y la deforestación en este país. En primer lugar, analiza los enfrentamientos que ocurrieron entre el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y los campesinos en diversas zonas de reserva forestal, en las cuales los campesinos explotaban el bosque. En segundo lugar, estudia los conflictos entre campesinos y conservacionistas ocurridos en las fronteras entre los parques nacionales y los asentamientos creados por el Estado. La investigación concentra su atención en comprender los discursos y la semántica

* Esta investigación fue realizada gracias al apoyo financiero y académico recibido de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

a través de los cuales el Estado justificaba su intervención en estos conflictos, así como la represión contra los campesinos. Asimismo, toma en cuenta la perspectiva de académicos y expertos ambientales acerca de las relaciones existentes entre la deforestación y el campesino «precarista». El estudio utiliza fuentes primarias, provenientes de archivos públicos, así como bibliografía especializada.

Palabras clave: campesinos; tierra; conservación de bosques; deforestación; Costa Rica.

ABSTRACT: The article analyzes the relations between peasants and public policies regarding land tenure and forest conservation in Costa Rica between the 1960s and 1980s. It aims to study the social and ecological contradictions of such policies within the broader context that encompasses agrarian reform on one side and deforestation on the other. To begin with, it examines the confrontation between forest-exploiting peasants in reservation areas and the agency in charge of land distribution (Instituto de Tierras y Colonización). Secondly, it assesses the conflicts between conservationists and the peasants established on the borders between national parks and state-managed settlements. The study focuses on the narrative developed by the State to justify the intervention in those conflicts on one side and the repression against the peasants on the other. Furthermore, it discusses the perceptions of scholars and environmentalists on the role of the «precarista» (*squatter*) in the process of deforestation. The study is based on archival sources and specialized bibliography.

Keywords: Peasants; Land Tenure; Forest Conservation; Deforestation; Costa Rica.

1. INTRODUCCIÓN

El análisis entrecruzado de la cuestión ambiental y la cuestión agraria brinda una oportunidad inmejorable para el diálogo entre ecólogos políticos, historiadores y estudiosos de los conflictos agrarios en general (Gerber y Veuthey 2010; Bernstein y Byres 2001). Un ejemplo derivado de este tipo de interrelaciones lo constituye el concepto de «ecología moral», creado por el historiador Karl Jacoby. En un artículo publicado en *Environmental History* (1997), Jacoby analizó los orígenes del movimiento conservacionista estadounidense mediante un estudio de caso que evidenciaba el desarrollo de una «lucha de clases» en torno a la creación de *Adirondack Park*, en el noreste del estado de Nueva York. El abordaje de las clases sociales desde la historia ambiental era una innovación importante en ese momento. Hasta finales de la década de 1990, este problema no había sido atendido con profundidad por los historiadores del movimiento conservacionista estadounidense, predominando cierta «ceguera» ante el problema de la diferenciación social (Griffin *et al.* 2019: 5-6). La familiaridad intelectual entre aquella historia ambiental temprana y el movimiento conservacionista parecía oscurecer la comprensión de las formas como las políticas y prácticas de conservación «despojaban», de

manera consciente o no, a los indígenas y colonos pobres asentados en las tierras protegidas (Griffin *et al.* 2019: 6).

En los escritos de Jacoby surgió una historia que planteaba el problema ambiental «desde abajo», en interrelación con diversas preocupaciones de la historia social, en particular, con el conflicto y la criminalidad. En su libro, *Crimes against Nature: Squatters, Poachers, Thieves, and the Hidden History of American Conservation* (2001), el concepto de ecología moral emergió como un intento de explicar localmente la experiencia de la conservación. Jacoby examinó el rol de las clases subalternas en la historia de un conflicto centrado en la utilización de los recursos naturales, recreando una narrativa contraria a las historias oficiales de la conservación; resituando, por tanto, a los actores locales en un primer plano. La ecología moral apareció como un «universo ético» que explicaba las acciones de estos actores, opositores y muchas veces resistentes ante las políticas de conservación. Se trataba, según Jacoby, de ofrecer un concepto que adicionalmente lograra balancear el «poder semántico» existente en las fuentes y en los archivos, inclinado hacia el lado del discurso conservacionista. El libro, según el propio autor, propone una narración quizás menos ordenada, aunque más honesta, al reflejar la complejidad de un mundo que no se había tenido en cuenta hasta ese momento (Jacoby 2001: 7).

La ecología moral ha calado en diferentes autores y campos de estudio. Una muestra de ello es el libro *Moral Ecologies: Histories of Conservation, Dispossession and Resistance*, de Griffin, Jones y Robertson (2019). Esta compilación analiza cómo los esquemas y políticas de conservación de las élites etiquetan como «delincuencia» las formas tradicionales o ancestrales de gestionar los recursos naturales. Tomando como guía la ecología moral de Jacoby, sus autores demuestran que, desde la Europa del siglo XVIII, pasando por el colonialismo en África, Australia y América, hasta Asia y Australia poscoloniales, el lenguaje y las prácticas de conservación suelen desposeer a los pueblos indígenas y otras poblaciones locales como los colonos pobres. Los estudios de caso incluidos explican en qué medida los programas y políticas de conservación de las élites pueden convertir las formas tradicionales y locales de aprovechar los recursos naturales (como la caza o la corta de leña) en tipos de «delincuencia». Y cómo los «bandidos» o «delincuentes» se defienden y contraatacan. Para Griffin *et al.* (2019) el lenguaje y las legislaciones sobre conservación, además de desposeerlas, predefinen a dichas poblaciones como una amenaza para el ambiente, debido a que resisten y luchan por conservar sus formas de vida, llegando a desafiar las leyes y normas establecidas.

Tomando como base el concepto de ecología moral, en este artículo proponemos la noción de «campesinos antiecológicos». Mediante esta noción nos interesa poner en debate cómo, desde el establecimiento de las políticas de tierras y de conservación de bosques en Costa Rica en la década de 1960, tuvo origen un proceso de configuración semántica que culpabilizó al campesinado por la deforestación, etiquetándolo como un peligro para los bosques tanto como un obstáculo

para el desarrollo del país¹. En este sentido, entendemos al «campesino antiecológico» como una resignificación moral, la cual es el producto de los lenguajes de valoración y de los esquemas explicativos que predominaban entre funcionarios públicos, conservacionistas, académicos y la prensa nacional entre las décadas de 1960 y 1980 en Costa Rica. Bajo estos lenguajes y esquemas, el campesino era contemplado como un «antimodelo», que desafiaba el orden desarrollista en cuanto al uso y tenencia de la tierra, así como en cuanto al uso y la protección del bosque.

La metodología de esta propuesta tiene dos componentes principales. Por una parte, el abordaje de tres casos de estudio, a partir de los cuales se ha organizado la documentación de archivo, así como las notas periodísticas. Y, por otra parte, el análisis de «descriptores semánticos», es decir, adjetivaciones y categorizaciones relativas al campesino –en el contexto de su relación con el problema de la deforestación–, incluidas en informes técnicos y publicaciones científicas divulgadas en Costa Rica entre las décadas de 1980 y 1990. El artículo está dividido en cuatro partes. Primero, contextualiza el surgimiento de las políticas de tierras y de conservación de bosques en Costa Rica entre las décadas de 1960 y 1980. Segundo, analiza, mediante tres casos de estudio, prácticas concretas de gestión de los bosques y de la tierra por parte del Estado, así como de conservacionistas vinculados con parques nacionales, con el objetivo de mostrar su carácter anticampesino. Tercero, escudriña las perspectivas de académicos y expertos acerca del papel del campesino en los procesos de colonización de tierras y de deforestación en Costa Rica para contar con una mirada triangulada de la mencionada configuración semántica. Al final se ofrece una sección de conclusiones. Si bien no entraremos en el detalle del «universo ético» de los campesinos, como diría Jacoby, buscaremos rastrear el «universo moral» de los funcionarios, conservacionistas y expertos. Siguiendo a este mismo autor, este artículo será también un primer paso para contrarrestar el dominio de la narrativa conservacionista en las fuentes y archivos institucionales de Costa Rica.

2. POLÍTICA DE TIERRAS Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES

Los estudios de caso incluidos en este artículo surgieron en medio de una coyuntura de crisis social y ecológica en Costa Rica, caracterizada por la agudización de los conflictos por la tierra entre el Estado y los campesinos «precaristas», así como por la tala de los bosques. Los datos revelan la magnitud de ambas crisis. Entre 1963 y 1979, miles de campesinos ocuparon unas 700 mil hectáreas, entre tierras del Estado y fincas privadas (Villarreal 1992). Solo en 1970 el Estado contabilizaba un total de 817 fincas ocupadas, abarcando casi 400 mil hectáreas (Grupo

1. Al hablar de campesinado nos referimos específicamente a los campesinos colonizadores de frontera agrícola, así como a los «precarista» (o «parásitos»). Estos últimos eran aquellos que se asentaban, «al margen de la ley», en tierras privadas o estatales, cubiertas por bosques o bien por pastizales y áreas de barbecho («charrales»), usualmente en semi abandono y caracterizadas por tener suelos poco fértiles o en degradación.

Centroamericano de Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural 1969; ITCO 1977; Barahona 1980). En cuanto a la deforestación, entre 1950 y 1973, los pastos dedicados a la ganadería aumentaron más del doble, pasando de unas 680 200 hectáreas en el primer año, a cerca de 1 558 053 hectáreas en el segundo, mientras que los bosques perdieron un millón de hectáreas entre 1950 y 1973. Esta fue la conversión de Costa Rica en un gran pastizal, como lo describió la antropóloga María Eugenia Bozzoli en 1977 (Bozzoli 1977: 571; Tosi 1976). Entonces se estimaba que, entre 1950 y 1961, la deforestación en el país era de unas 36 mil hectáreas por año, mientras que, entre 1961 y 1977, esta cifra había subido a 45 mil hectáreas por año (Pérez y Protti 1978).

La crisis por la tierra llevó al Estado costarricense a crear el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), en 1961². Aunque este instituto nació bajo la influencia de los Acuerdos de Punta del Este y de la Alianza para el Progreso, es cierto que recogía el legado de una serie de proyectos de reforma agraria planteados desde la década de 1950, principalmente por el Partido Liberación Nacional (PLN), la más importante fuerza socialdemócrata de la época (Seligson 1978; Rivera 1986: 50-52; Rowles 1982; Barahona 1980; Villarreal 1983; Villarreal 1990; Royo 2003). La intervención del Estado en la estructura agraria era considerada una condición indispensable para cimentar un sistema capitalista, de propietarios directos y predispuestos a la modernización. Los objetivos originales del instituto constituían una mezcla ambigua de intenciones, abarcando desde el respeto a la propiedad privada, la limitación de la concentración de la tierra y la eliminación de las injusticias sociales en el sector rural, hasta la conversión de la finca campesina en una empresa, así como la organización de cooperativas. En sus primeros años, con un escaso presupuesto y bajo un perfil asistencialista, el instituto fundó colonias en diferentes regiones del país para trasladar allí a familias de campesinos sin tierra. Debido al fracaso de este modelo, a finales de los sesenta fue creado un programa de asentamientos campesinos con el objetivo de resolver los conflictos y las «invasiones» de tierra en los mismos lugares donde ocurrían. A menudo esto implicaba la compra de la tierra por parte del ITCO para distribuirla en parcelas entre los campesinos (Salazar *et al.* 1977).

A pesar de su identidad agrarista, el ITCO fue designado además como administrador de las reservas forestales del Estado. Costa Rica contaba, en ese momento, con cientos de miles de hectáreas cubiertas de bosque, distribuidas por todo el país. Al instituto se le encomendaron dos grandes tareas al respecto: primero, la realización de un inventario de las tierras del Estado y, segundo, la administración de las reservas forestales mencionadas (ITCO 1964: 30-45; ITCO 1965: 26-34; ITCO 1966: 59-67; ITCO 1967: 68-98). Lo que parecía una asignación natural de funciones se convirtió, con los años, en un problema difícil de manejar para el instituto.

La deforestación motivó la creación del sistema de parques nacionales. La Ley Forestal de 1969 estableció un Departamento de Parques Nacionales, adscrito a la

2. El ITCO fue creado mediante la Ley N. 2825 de 14 de octubre de 1961. En 1982 fue renombrado como Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y, en 2012, como Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Dirección Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, luego denominada como Dirección General Forestal³. Esta sección, vale decir, recibió la mayor parte de las atribuciones que tenía el ITCO en la parte forestal, entre ellas, la gestión de las reservas forestales y otras áreas de valor ecológico. Bajo este marco institucional, las áreas protegidas crecieron con rapidez en todo el país en la década posterior. Aunque en 1970 Costa Rica solo disponía de unas tres mil hectáreas protegidas, en los tres siguientes años fueron anexadas más de 40 mil hectáreas. Durante la segunda mitad de la década de 1970 fueron incorporados grandes parques en el sur del país, como Chirripó y Corcovado, así como reservas forestales y refugios de vida silvestre (Rodríguez y Vargas 1988: 168-172; Boza 1993; Evans 1999; Boza 2015; López y Granados 2016). El ritmo de la expansión fue sostenido incluso durante la crisis económica de finales de la década de 1970 e inicios de 1980, así como durante el período más crítico de la guerra civil en Centroamérica, a tal punto que, en 1986, el país contaba con casi medio millón de hectáreas protegidas.

En el año de 1986, la sumatoria de las tierras intervenidas por el ITCO y aquellas cubiertas por algún esquema de protección equivalía a cerca de un 35 por ciento del área agrícola nacional declarada en el Censo Agropecuario de 1984. En esta gran transformación del territorio nacional, la coexistencia de las áreas protegidas con las colonias y asentamientos campesinos del ITCO fue compleja y marcada por las tensiones existentes entre la política agrarista del instituto y la política de conservación de bosques. Fue en este escenario en el que ocurrieron los casos estudiados a continuación.

3. TIERRA, RESERVAS FORESTALES Y CAMPESINADO

Recién iniciadas sus labores, en febrero de 1964, el ITCO tuvo que enfrentar un conflicto con campesinos asentados en los robledales del Bosque Nuboso, sobre la Carretera Interamericana, a unos noventa kilómetros al sur de San José, la capital de Costa Rica. La Carretera Interamericana había sido construida por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial como un proyecto estratégico para facilitar el tránsito hacia el Canal de Panamá y, al igual que en el resto de América Latina, para favorecer el transporte militar y de mercancías a través del continente (Bess 2022). En Costa Rica, uno de los primeros tramos construidos de esta carretera partía desde San José, cruzaba el mencionado Bosque Nuboso, entre los 2 mil y 3 mil metros de altura, para luego descender a los valles y llanuras del sur, limítrofes con Panamá (Serrano 1976). En 1945, mientras era construido este tramo, dichos robledales fueron declarados como reserva forestal como respuesta a una serie de estudios realizados por naturalistas costarricenses y científicos del U. S. Forest

3. Ley Forestal N. 4465, del 25 de noviembre de 1969, *La Gaceta* N. 274 del 2 de diciembre de 1969; Reglamento a la Ley Forestal, Alcance N. 47, 24 de abril de 1973.

Service, quienes destacaron su extraordinaria riqueza biológica (Dayton 1944-1945; Kapelle 1996; Boza 2015:)⁴.

En los siguientes años, los robledales adquirieron una relevancia ya no solo ecológica, sino también económica y energética, sobre todo para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este instituto estatal, encargado bajo monopolio de generar y suministrar la electricidad a empresas y casas de habitación, estaba en medio de una coyuntura de ampliación de sus mercados, así como de su capacidad de generación eléctrica mediante la construcción de embalses en diferentes regiones del país (CEPAL 1959). Uno de estos era el proyecto hidroeléctrico Río Macho, construido en 1963, el cual dependía de las aguas que se recargaban en las montañas donde crecían los bosques de roble (Lombo 1963; de León *et al.* 1986). A pesar de constituir una zona bajo protección, una parte importante estaba ocupada por aserraderos y fincas de gran tamaño, algunas de más de mil hectáreas de extensión, así como por parcelas de familias dedicadas a la ganadería de leche en pequeña escala y la explotación de carbón vegetal, extraído de la quema de los robles (Pedroni 1991) Estas familias se habían asentado al borde de la Carretera Interamericana, aprovechando así la vía para llevar el carbón a las ciudades de San José y Cartago.

La creación de la Reserva Forestal Río Macho, en 1964, con el objetivo de proteger la cuenca alta del citado proyecto hidroeléctrico, supuso un problema inevitable para el ITCO (ITCO 1965: 31). El instituto tuvo que intervenir por ley en la reserva ante el aumento de las «invasiones» de tierra y la deforestación que, según la prensa, eran causadas por diferentes grupos de campesinos⁵. Se hablaba entonces de una «devastación de las riquezas naturales» y de una «destrucción brutal» de los robledales, a cargo de familias que, «sin ninguna norma técnica en las regiones vírgenes, han causado verdaderos problemas económicos y sociales»⁶. Además del envío de funcionarios para evaluar la situación, el instituto destinó un grupo de guardas armados en coordinación con el ICE (ITCO 1965: 31). La prensa advirtió que esta última había sido una intervención tardía y precipitada, provocando la reacción violenta de los carboneros. Una nota de *La Prensa Libre*, de febrero de 1964, informaba que unas quinientas familias de carboneros estaban amotinadas contra el ITCO y sus guardas forestales, al no dejarlos sacar «[...] ni una pulgada de madera ni un saco de carbón, que son sus fuentes principales de ingresos»⁷. «Preferimos que nos entierren con los muertos nuestros», afirmaban los carboneros.

4. Editorial «El bosque de robles», *Revista de Agricultura*, N. 8, Año XV (Agosto de 1943): pp. 338-340. La zona en estudio contiene tres grandes especies de roble, a saber, *Quercus costaricensis*, *Q. copeyensis* y *Q. seemannii*. Estos árboles han sido utilizados tradicionalmente como leña para el secado del café y el consumo doméstico, para el levantamiento de cercas, así como para la producción de carbón (Kapelle 1996).

5. Véase además: ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 197, 17 de febrero de 1964, pp. 1334-1337; ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 197, 2 de marzo de 1964, pp. 1414-1416; ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 205, 3 de marzo de 1964, pp. 1443-1444.

6. Editorial «Devastación de las riquezas naturales», *La Prensa Libre*, 13 de febrero de 1964, 2A.

7. «Peligro de violencia en la Interamericana», *La Prensa Libre*, 12 de febrero de 1964, 1A-2A.

Los campesinos reclamaban que el ITCO los «quería matar de hambre» al prohibirles la extracción de carbón; no querían vender sus tierras porque allí descansaban en paz sus familiares, estaban además sus casas y las escuelas de sus hijos⁸. «No nos echarán fácilmente de estas montañas», advertía un carbonero⁹. Otro de ellos justificaba su asentamiento en estos bosques de la siguiente manera:

Hace algún tiempo me vi sin trabajo y abocado a una situación espantosa de pobreza. Mi mujer y mis siete hijos no son una carga, porque los adoro a todos, pero sí un problema para un hombre en la calle. Entonces decidí buscar horizontes y me resolví llegar a los páramos del Macizo de la Muerte, frente al Cerro de la Asunción. Yo sabía que estas tierras –solo roca y cañueles– no eran de nadie. Después me dí cuenta que eran Parques Nacionales o algo así. Pero como nadie los cuida, ni los atiende, construí un ranchito al inicio del trillo que lleva a la cumbre del Buena Vista y decidí vivir aquí...Yo no quiero limosnas. Lo que quiero es que algún propietario de finca me ofrezca trabajo y un pedacito de tierra para levantar el rancho para mi familia. O que el ITCO me ayude a trasladarme a un lugar donde encuentre medios de vida¹⁰.

El conflicto atenuó en los siguientes meses. El ITCO resolvió mantener a los carboneros en la región, regularizando su situación jurídica y acordando un plan de reforestación con las familias¹¹. En cualquier caso, a través de esta disputa quedó reflejado que, en el juego de poder del Estado costarricense, los intereses del ITCO estaban supeditados a los del ICE¹². Este último, al contrario del ITCO, sometido a la crítica por parte de la elite terrateniente y la prensa afín, era una institución que gozaba de un alto grado de legitimidad en la sociedad costarricense de la época, con un capital político ganado gracias a su programa exitoso de generación eléctrica, el cual no solo había beneficiado a los hogares urbanos sino, sobre todo, había sido fundamental para el crecimiento de la industria desde la década de 1950. En este sentido, la balanza de poder estaba claramente del lado del ICE. Esto explica que la justificación que hizo el ITCO de su accionar ante los carboneros buscara «dualizar» en forma dramática la situación, argumentando que su reacción era producto de una emergencia o, cuando menos, de una situación extrema en la que estaba en juego el futuro del país: o se permitía la extracción de carbón, o se apoyaba el proyecto hidroeléctrico del ICE. De acuerdo con el ITCO, dicho proyecto era vital para el «desarrollo económico» de Costa Rica, mientras que permitir la extracción

8. «Preferimos que nos entierren con los muertos nuestros», *La Prensa Libre*, 14 de febrero de 1964, 1A-3A.

9. «Plan hidroeléctrico o sacos de carbón», *La Prensa Libre*, 13 de febrero de 1964, 1A-4A.

10. «No queremos caridad: queremos ayuda retribuable con trabajo», *La Prensa Libre*, 16 de abril de 1964, 6A.

11. Editorial «Solución del ITCO», *La República*, 7 de marzo de 1964, 6; «ITCO echó marcha atrás con carboneros», *La Prensa Libre*, 31 de marzo de 1964, 1A-4A.

12. Sobre las negociaciones ICE-ITCO; véase: ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 204, 2 de marzo de 1964, pp. 1426-1429.

de carbón por parte de los campesinos era favorecer la «deforestación irracional»¹³. Los intereses de los campesinos no podían «subordinar ni comprometer» el futuro de la nación, agregaba al respecto el editorial de un importante diario nacional¹⁴.

Por otra parte, este episodio reveló la contradicción que subyacía en los objetivos del ITCO como institución, oscilantes entre atender la demanda de la tierra y la protección del bosque. El instituto no pudo obviar la función que su ley de creación le había asignado y reconocía por tanto que, en lo que respecta a los carboneros, tenía plena conciencia de la «[...] responsabilidad que le asigna la misma ley en cuanto a dar tierra a los pequeños agricultores y procurarles sus medios de trabajo...»¹⁵. En otras palabras, del mismo modo que los perseguía por ser «deforestadores irracionales», estaba obligado a contemplarlos como «campesinos sin tierra»¹⁶.

De este modo, el campesinado adquirió una doble dimensión como actor social, no siempre descifrable para el Estado y la prensa: como merecedor de la tierra redistribuida tanto como culpable de la deforestación. Esta compleja realidad sería descrita por los periodistas y los burócratas urbanos utilizando un conjunto de etiquetas y tropos que, entre extremos de sutileza y claridad, delataban desconocimiento tanto como discriminación hacia los campesinos y su entorno cultural. Estas representaciones tenían un amplio rango semántico, que abarcaba desde aquellas paternalistas y proteccionistas, cargadas de un típico idealismo campesino, hasta otras despreciativas sobre la cultura local. Una muestra de ello fue el vocabulario estigmatizante utilizado por la prensa para caracterizar a los carboneros. Éstos eran «campesinos distintos», apegados a su hogar, «renuentes» a que sus hijos e hijas salgan a la ciudad por «razonamientos de lógica moral», buenos compañeros entre sí y hospitalarios. Eran alegres pero también «belicosos» cuando defendían sus derechos. Parecen «cuákeros», decía una nota¹⁷. Son «gentes honestas», señalaba otro periodista, que conservan virtudes que hace muchos años otros sectores perdieron¹⁸. Una estigmatización más violenta y contundente era aquella que los describía simplemente como «carboneros ignorantes» que asaltaban los bosques¹⁹.

El episodio de los carboneros demostró el carácter anticampesinista del ITCO cuando trataba de controlar las reservas forestales. Si bien la prensa señaló que, en la zona en disputa, además de los carboneros existían grandes propiedades en manos de terratenientes y dueños de aserraderos, el conflicto estuvo focalizado sobre los campesinos. ¿Era acaso mayor el impacto ecológico de éstos, que utilizaban rústicos sistemas de producción de carbón, al de los grandes finqueros y aserraderos que talaban en gran escala? El favorable trato que el ITCO le brindaba

13. «Plan hidroeléctrico o sacos de carbón», *La Prensa Libre*, 13 de febrero de 1964, 1A-4A.

14. Editorial «Devastación de las riquezas naturales», *La Prensa Libre*, 13 de febrero de 1964, 2A.

15. «Plan hidroeléctrico o sacos de carbón», *La Prensa Libre*, 13 de febrero de 1964, 1A-4A.

16. Arnolando CASTRO, «Los carboneros y el ITCO», *La Prensa Libre*, 17 de febrero de 1964, 2A.

17. «Preferimos que nos entierren con los muertos nuestros», *La Prensa Libre*, 14 de febrero de 1964, 1A-3A.

18. Arnolando CASTRO, «Los carboneros y el ITCO», *La Prensa Libre*, 17 de febrero de 1964, 2A.

19. Yehudí MONESTEL, «El asalto a las reservas del sur», *La Prensa Libre*, 14 de enero de 1964, 2A.

a los grandes propietarios fue una continua queja por parte de las organizaciones campesinas y la izquierda a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. Esto quedó manifiesto en un conflicto ocurrido en la zona de norte del país, en un contexto ecológico y social notoriamente distinto al de los bosques de roble: la reserva Chambacú.

Chambacú era una enorme zona de Bosque Tropical Húmedo, con más de 100 mil hectáreas de extensión, situada cerca de la frontera con Nicaragua (Salazar *et al.* 1977: 32; FAO 1981). A mediados de la década de 1960, era una región todavía dominada por los bosques, con unos pocos caseríos dispersos y la casi total ausencia de vías de comunicación terrestres (Sandner y Nuhn 1966: 153-189). A pesar de ello, era una zona en la que convergían varias rutas de colonización provenientes de poblaciones aledañas, así como migrantes del oeste del Valle Central de Costa Rica. Era cuestión de tiempo que estos bosques fueron «invadidos» por campesinos. Atento a esto, el ITCO incorporó pronto a Chambacú en sus planes de trabajo. Así, por ejemplo, en 1966, el instituto preparó un proyecto de colonización en busca de obtener financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (ITCO 1966a 1966b). El objetivo de este proyecto era favorecer la explotación privada de la tierra en una zona que estaba en «semiabandono», para lo cual proponía la creación de 200 parcelas privadas para la producción ganadera, cada una con una extensión aproximada de 50 hectáreas. En total, la futura colonia abarcaría cerca de 10 mil hectáreas (ITCO 1966a: 2). Este era un proyecto con un perfil ganadero que difería por completo de aquellos implementados en la mayoría de las colonias desarrolladas hasta ese momento por el ITCO, dedicados a fomentar cultivos campesinos como arroz secano, maíz y frijoles.

A partir de entonces, Chambacú pasó a ser un proyecto «en desarrollo», pendiente pero recurrente en las oficinas de los funcionarios y la junta directiva del ITCO. Su gran tamaño y riqueza forestal atrajo la atención de personajes disímiles, con ideas e intereses radicalmente distintos entre sí²⁰. Por ejemplo, en 1971, dos reconocidos científicos estadounidenses, Leslie Holdridge y Josep A. Tosi, propusieron al ITCO el desarrollo de un complejo agroindustrial en Chambacú, tomando como base un estudio realizado por ellos mismos para el Banco Interamericano de Desarrollo²¹. La reserva tenía un gran potencial para la producción forestal, afirmaron en una sesión ante la junta directiva, aunque también contaba con áreas idóneas para una colonia agrícola, así como para el cultivo de Palma africana y frutas tropicales. Para esto último era necesario construir caminos cerca de las áreas de potencial agrícola, pero lejos de los bosques, advertían, para evitar su acaparamiento por parte de los campesinos, de modo que fueran explotados «por medios más racionales»²².

20. ITCO (1977a).

21. ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 1299, 16 de febrero de 1971, p. 2.

22. ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 1299, 16 de febrero de 1971, p. 3.

Dos años después, fueron el embajador de Taiwán y un empresario de esa misma nacionalidad, quienes llegaron al ITCO para proponer la creación de un complejo agroindustrial en Chambacú, con la finalidad de procesar la madera e instalar plantas textiles²³. Luego de una visita a la reserva, advirtieron que la explotación maderera era ineficiente porque aprovechaba porcentajes muy bajos de la madera extraída, debido a que las técnicas de corte y extracción no eran las adecuadas²⁴. De este modo, ofrecieron al ITCO instalar una explotación maderera para aprovechar los residuos de la tala en la producción de «rayón» (Viscosa), para lo que solicitaban que el instituto preparara un plan de explotación como un paso previo a la inversión taiwanesa. Ante la estrechez financiera en la que vivía la institución, esta última condición no fue bien recibida por la junta directiva y obstaculizó cualquier entendimiento posible entre las partes.

El tercer personaje destacado en la historia de Chambacú fue un hacendado que, en la década de 1980, tendría un polémico papel en la historia de Costa Rica y de Centroamérica: John Hull Clarke. Este estadounidense, llegado a Costa Rica a finales de la década de 1960, fungió como un contacto de la CIA (*Central Intelligence Agency*, Estados Unidos) en Centroamérica durante el momento más crítico del conflicto entre «la contra»²⁵ y el régimen sandinista (Avirgan y Honey 1989). Hull utilizaba sus fincas en la zona norte de Costa Rica para colaborar en el abastecimiento y apoyo a los rebeldes, además de facilitar sus pistas de aterrizaje para la introducción ilegal de armas en Costa Rica, destinadas a dichos grupos. En una compleja dinámica que entremezclaba la geopolítica de la Guerra Fría y el narcotráfico, Hull fue partícipe además en el tráfico de drogas que, desde dichas pistas, era dirigido a los Estados Unidos, en los mismos aviones que traían las armas a Costa Rica, bajo el conocimiento de la DEA (*Drug Enforcement Administration*, Estados Unidos) y la CIA (Muñoz 1999; Álvarez 2013).

El ITCO tuvo muchas dificultades para controlar un territorio tan vasto como Chambacú. Aunque alguna vez lo intentó mediante el envío de guardas forestales, la estrechez de su presupuesto obligó a cancelar esta asignación²⁶. La ausencia del instituto facilitó la toma de tierras por parte de campesinos, así como la extracción ilegal de madera por aserraderos y comerciantes. Esto podría decirse que formaba parte de la agenda regular del ITCO. Lo que resultó excepcional fue lo ocurrido en el año de 1973, en el seno de la junta directiva del instituto. Desde octubre de dicho año, hubo denuncias ante esta junta acerca de la apropiación indebida de terrenos en Chambacú por parte de John Hull²⁷. Este estadounidense había acaparado una importante cantidad de tierras producto de la compra ilegal a campesinos

23. ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 1711, 12 de diciembre de 1973, p. 6-9.

24. ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 1711, 12 de diciembre de 1973, p. 7.

25. «La contra» refiere al movimiento armado rebelde, surgido en contra del régimen sandinista, el cual contó con un decidido apoyo del gobierno estadounidense y de otros países de la región (Kruijt 2011).

26. ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 1710, 12 de diciembre de 1973, p. 2-3.

27. ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 1687, 15 de octubre de 1973, p. 10.

ya asentados, lo que evidentemente no era permitido en una tierra propiedad del ITCO. Pese a ello, en diciembre de ese mismo año, el propio Hull presentó ante el instituto una oferta para regularizar unas 1250 hectáreas dentro de la reserva. Las primeras reacciones de los directivos apuntaron a rechazar de plano la oferta del estadounidense, indicando que Hull no podía «alegar ignorancia de la ley», lo que podría llevarlo a un juicio por usurpación de tierras²⁸. Sin embargo, conforme avanzó la sesión predominó una posición favorable ante tan atípico pedido. Uno de los directivos advirtió que, en todo caso, la reserva estaba siendo apropiada a través de «invasiones» y que «mal puede» el instituto rechazar los pedidos de compra, estableciendo para ello un precio mínimo por la tierra²⁹. Al final, con un solo voto en contra, la directiva aprobó la visita de un funcionario a Chambacú para realizar las mediciones de los terrenos de Hull y las gestiones afines.

Los sucesos de los robledales y de Chambacú ofrecen evidencias de distinta naturaleza sobre el carácter anticampesinista del ITCO. En los bosques de roble el ITCO reaccionó mediante una represión directa de los campesinos allí asentados, aprovechando su vulnerabilidad y precariedad. Y lo hizo en medio de una relación de interés y conveniencia con el ICE, supeditando el mandato por ley de resolver el problema de la tierra, al interés nacional en torno a la producción de electricidad. En Chambacú, por una parte, el instituto estuvo atento a proyectos agroindustriales en los que la participación campesina era reducida o marginal, como ocurrió con el proyecto ganadero antes descrito. Por su escala y riqueza, Chambacú era el lugar idóneo para una acción de carácter empresarial y comercial. Por otra parte, la regularización de las tierras acaparadas por grandes propietarios, como John Hull, no podía ser sino la mayor contradicción de una institución destinada a atender las necesidades de miles de familias de «precaristas». El sustrato campesino del instituto quedaba más que puesto en duda.

4. PARQUES NACIONALES, CONSERVACIONISMO Y CAMPESINADO

La consolidación del ITCO como institución ocurrió en la década de 1970, en una coyuntura en la cual la deforestación se había convertido en un fenómeno público y de interés nacional (Rodríguez y Vargas 1988; Porras y Villarreal 1993). Fue paralela, además, a la formación de una comunidad conservacionista de tipo profesional, cada vez más cercana al poder del Estado (Fournier 1991). Como se ha visto, la doble tarea asumida por el instituto en sus inicios, de dotar de tierras a los campesinos y de gestionar las reservas forestales, lo condujo a un laberinto del que no salió siempre bien librado. Aunque la Ley Forestal de 1969 le restó atribuciones, los bosques continuaron siendo parte importante en la agenda del instituto. Esto lo llevó a desenvolverse en medio de relaciones de tensión y conflicto con los

28. ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 1712, 17 de diciembre de 1973, p. 14.

29. ITCO, Acta de la Junta Directiva, N. 1712, 17 de diciembre de 1973, p. 15.

conservacionistas y, en particular, con aquellos vinculados con las áreas protegidas como funcionarios y científicos nacionales e internacionales.

La deforestación era una realidad al interior de los asentamientos campesinos del ITCO. El arraigo de las familias en dichos asentamientos dependía, en gran medida, de la tala del bosque para «hacer finca». Obsérvese el caso de la Colonia Trinidad, una de las primeras colonias formadas por el ITCO en 1963, en la zona norte de Costa Rica. Apenas tres años después contaba ya con 500 hectáreas sembradas de musáceas, 200 de maíz, 100 de arroz y otras tantas de café, mientras que los pastos cubrían más de 400 hectáreas (Sandner y Nuhn 1966: 268). Para los campesinos, la tala del bosque no solamente era el primer paso para ganar dinero mediante la venta de la madera, o para producir alimentos, sino también era la acción más importante para justificar la posesión de la tierra ante el ITCO. Estas eran las denominadas «mejoras», que le permitían legitimar la propiedad de la parcela una vez que los inspectores del instituto documentaban la «invasión» de la finca (lo que significa la apertura de un expediente), o bien para empezar con el proceso de titulación de la parcela. Si en 1986 el área afectada por el ITCO en el país rondaba las 600 mil hectáreas, es de asumir que hubo una significativa deforestación, en pequeña escala, en cada nueva parcela (Mora 1990: 97).

Además de surgir en una misma coyuntura, los asentamientos del ITCO y las áreas protegidas eran próximos territorialmente hablando. La mayoría de los asentamientos del ITCO fueron creados en las tierras marginales de antiguas haciendas, entre pastizales abandonados, charrales y bosques en sucesión, es decir, en tierras que estaban fuera de la actividad productiva agrícola. Este había sido el motivo por el cual habían sido «invadidas» por los «precaristas»: su abandono facilitaba la toma de la tierra y el establecimiento, en silencio, de los primeros «ranchos» y casas de habitación. De igual manera, muchos de los primeros parques nacionales y reservas biológicas estaban situados en este tipo de paisaje: zonas boscosas de poco interés para la agricultura comercial, con baja densidad demográfica, suelos pobres y de difícil acceso por tierra.

Esta vecindad fue a menudo conflictiva. Los parques nacionales emergieron como «piezas de territorio», en medio de pueblos con tradiciones en el uso del bosque distantes respecto a lo que defendía la lógica conservacionista. La creación de los parques rompió con la tradición de la caza que los vecinos habían practicado por años, de la misma forma que lo hizo con la costumbre de cultivar maíz y frijoles en las laderas de las montañas. Un aspecto que complicaba este entorno de relaciones era que el Estado con frecuencia no pagaba de inmediato las tierras expropiadas al propietario original, lo que provocaba que este mantuviera el derecho de uso de la tierra, aunque formara ya parte de un parque nacional (Artavia 2008). Mientras que los asentamientos enfrentaban el desafío de crear una nueva comunidad entre los «precaristas», los parques nacionales conllevaron la ruptura tajante de los lazos entre los pueblos y los bosques inmediatos.

El caso del Parque Nacional Santa Rosa es ejemplar a este respecto. Este parque tiene un singular valor histórico y ecológico para Costa Rica. Alguna vez

hacienda ganadera, en sus tierras y, en particular, en su casona principal, ocurrió una de las batallas más representativas de su historia nacional. En 1856, fue librado allí un combate contra los «filibusteros», un grupo de mercenarios estadounidenses que, por entonces, intentaban controlar Nicaragua y Centroamérica (Molina 2016). Santa Rosa contiene, además, uno de los residuos más extensos de Bosque Tropical Seco en Mesoamérica. Aunque en el pasado este ecosistema abarcaba el Pacífico mesoamericano, desde México hasta Panamá (unos 500 mil kilómetros cuadrados), en la década de 1980 apenas había un dos por ciento de esa extensión en condición poco alterada y, aún menos, bajo algún tipo de protección (Janzen 1988). En 1966, la casona fue declarada monumento nacional, mientras que el parque fue creado en 1971, incluyendo la casona y una parte de la antigua hacienda. En torno a Santa Rosa surgió una notable comunidad de conservacionistas profesionales, entre los que destacaban funcionarios públicos, así como académicos de universidades nacionales e internacionales. Mario Boza y Álvaro Ugalde, dos pioneros de la conservación en Costa Rica, participaron en el desarrollo inicial del parque en la década de 1970 (Fournier 1999; Boza 2015), mientras que Daniel Janzen, un reconocido ecólogo estadounidense, tomó al parque como laboratorio para sus investigaciones sobre el Bosque Tropical Seco (Allen 2001; Evans 1999: 155-159).

En 1971, la inauguración del parque recibió una amplia atención por la prensa de la capital, contando además con la presencia de figuras relevantes del gobierno. A pesar de esta repercusión, el parque enfrentó una serie de problemas que complicaron su consolidación en las décadas de 1970 y 1980. El primero de ellos fue el conflicto con campesinos «precaristas», asentados en las tierras costeras del parque, quienes desde 1968 «habían talado y quemado el bosque, ante la absoluta pasividad del ITCO, el Resguardo Fiscal y el ICT Instituto Costarricense de Turismo» (Boza 2015: 199-200)³⁰. La tensión con los «invasores» llegó a un punto que los funcionarios llegaron a considerar que «arriesgaban sus vidas» por proteger el parque (Allen 2001: 62). En 1970, el propio presidente de la República, José Figueres Ferrer, emitió unas duras palabras en contra de los campesinos durante una visita a la zona³¹.

Otros conflictos ocurrieron con los ganaderos situados en las vecindades. Algunos de ellos aún llevaban a pastar sus hatos a las tierras del parque, como seguramente lo habían hecho desde mucho tiempo atrás. Más que cubierto por el bosque, el parque abarcaba, en esos tiempos, grandes pastizales de «Jaragua» (*Hyparrhenia rufa* (Nees.) Stapf), una hierba de origen africano. Como lo indicaba un antiguo administrador del parque, dichos pastizales eran de «uso público». Los hacendados vecinos aprovechan en forma gratuita los «jaraguales» y los estanques de agua para sus hatos. «Pequeños y grandes ganaderos», señalaba este administrador, «[...] no se preocupaban si sus hatos se pasaban a vivir a Santa Rosa, el ganado

30. «Problema de precaristas en hacienda Santa Rosa», *La Nación*, 10 de febrero de 1970, 32.

31. «Vamos a echar a los invasores de tierras», dice Figueres, *La Nación*, 18 de mayo de 1970, 1-4-6.

lo retiraban para venderlo o cuando los sabaneros de la hacienda les avisaban...» (Cruz 1975: 44)³².

En la década de 1980, el ITCO creó varios asentamientos en los alrededores del parque. Uno de ellos fue producto de una toma de tierras llevada a cabo por campesinos en el sitio denominado Paso Bolaños, luego conocido como Colonia Bolaños, localizado unos 20 kilómetros al norte de Santa Rosa. Los «precaristas» tomaron una franja de tierra de poco más de mil hectáreas de extensión, cubierta por «jaraguales», sin actividad agrícola alguna³³. La finca estaba hipotecada y con un historial de propiedad confuso; su supuesto dueño era absentista y residente en la ciudad de San José³⁴. Aunque algunos de los campesinos vivían allí desde finales de los años setenta, la toma de la tierra se alargó por varios años, con recurrentes «invasiones» y desalojos por parte de la Guardia Rural, la entidad policiaca que atendía la zona en esa época. Los años más intensos del conflicto fueron los comprendidos entre 1980 y 1982, cuando la policía enfrentó a los «invasores» en diferentes ocasiones y los expulsó de la propiedad, así como quemó sus casas y cosechas, además de darle fuego a una escuela levantada por los vecinos. El punto crítico fue alcanzado en mayo de 1981 debido a la muerte de un campesino durante un enfrentamiento con la policía³⁵. Este incidente supuso la intervención de la Asamblea Legislativa, el congreso costarricense, y obligó al ITCO (entonces ya renombrado como IDA) a brindar una mayor atención al caso. A pesar de ello, la tierra tomada no fue regularizada sino hasta la segunda mitad de la década de 1980³⁶.

Paso Bolaños cumplió con el patrón que caracterizaba a muchas de las tomas de tierra atendidas por el instituto: «invasión» progresiva de la tierra, desalojos y represión por parte del Estado, negociación entre los ocupantes, el propietario y el Estado, así como la apertura de un expediente para evaluar la compra de la finca. Pero lo que hizo particular al caso de Paso Bolaños fue que su historia aconteció al mismo tiempo que el Parque Nacional Santa Rosa experimentaba un proceso de expansión mediante la expropiación y compra de tierras aledañas. La «restauración» del Bosque Tropical Seco, en el sitio Santa Rosa, había sido exitosa, lo que había motivado a los funcionarios y científicos involucrados a extender la condición de protección a otros sectores de la región, con residuos todavía de dicho ecosistema³⁷. Para ello, tuvo lugar una campaña de captación de fondos a nivel nacional e internacional, cuya cabeza más visible fue Daniel Janzen, con el fin de financiar la adquisición de las fincas de interés (Allen 2001: 93, 108, 117). Este proyecto de

32. Para otros ejemplos de uso público de estos pastos, véase: MAG (1973: 11).

33. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 40.

34. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 35, 51.

35. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 211-213.

36. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 285-289.

37. Un relato de este éxito es el libro *Green Phoenix. Restoring the Tropical Forest of Guanacaste, Costa Rica* (Allen 2001), cuyo título deja pocas dudas sobre el componente de «restauración» y «regeneración» detrás de la experiencia de Janzen, junto con los funcionarios y conservacionistas costarricenses. Véase también: Wallace (1992: 157-170).

expansión significó que las tierras de Paso Bolaños adquirieran una importancia estratégica para los conservacionistas.

La primera evidencia de dicho interés fue una carta interna del instituto, firmada por el Jefe de Oficina de Tierras, con fecha de junio de 1986³⁸. En esa carta, el funcionario solicitaba información acerca del estado del conflicto de ocupación precaria de Paso Bolaños, con el objetivo de enviar la información respectiva al Servicio de Parques Nacionales. Estaba claro que el funcionario conocía acerca del proyecto de expansión del parque y cumplía con una investigación encomendada por dicho servicio. Otra nota interna, de noviembre de 1986, firmada por un funcionario del instituto, también estaba relacionada con este hecho, indicando que «[...] tengo entendido que el Ministerio de Agricultura está interesado en adquirir de la misma finca Paso Bolaños] un área de 500 has. para ampliar el Parque de Santa Rosa...»³⁹.

En el siguiente año, el interés de los conservacionistas por estas tierras dio paso a una circunstancia extraordinaria. En enero de 1987, representantes de los campesinos de Paso Bolaños enviaron una carta al instituto planteando una solicitud de intervención en la propiedad⁴⁰. Según su testimonio, desde noviembre de 1986, un científico norteamericano estaba tratando de comprar tierras a los poseedores en precario, ofreciendo «precios ridículos» a las familias, a través de un abogado de San José. Atestiguaban que dicha persona pretendía que «[...] no trabajemos la tierra, nos amenaza con el hecho de que va a ir a la Guardia Rural de La Cruz a poner denuncia de que nosotros deforestamos, lo cual no es cierto, ya que en «Paso Bolaños» casi no hay montañas»⁴¹.

[...] pero todo lo hace con coacción con el sentido de ir comprando primero a algunas familias y luego poco a poco a todos, ello con el fin de en un futuro cercano sacarnos a todos de tal finca y apropiársela él, pero no sabemos con [qué] fines, él dice que es para crear una reserva [biológica], pero a costa del sacrificio de todas las familias que viven en «Paso Bolaños», ya que de la tierra todos y cada uno de nosotros, ocupantes en precario, es que obtenemos el sostén nuestro y de nuestros hijos⁴².

Y solicitaban la intervención del instituto para:

[...] que se evite la compra de tierras en «Paso Bolaños», por el supuesto norteamericano que antes indicamos, ello por cuanto en nuestro caso las tierras que poseemos en precario están cumpliendo UNA FUNCIÓN SOCIAL, la cual es ponerlas en producción para bien de nuestras familias, para su sustento diario, y para bien de la Nación también, por cuanto estamos contribuyendo a la producción y riqueza de Costa Rica, y lo

38. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 264.

39. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 268-269.

40. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 274-275.

41. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 274.

42. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 274.

que pretende el supuesto norteamericano es apropiarse de todas las tierras de «Paso Bolaños» y sacarnos de las mismas, ello con intereses personales y mezquinos...⁴³.

Ante estas acusaciones, el instituto levantó un informe el cual constató la compra de tierras y reconoció que «por manifestaciones obtenidas se nota que ha habido un poco de presión para obtener las ventas», tratando de convencer a los campesinos que sus tierras serán expropiadas, que las «mejoras» no serán bien pagas o que el instituto (IDA) los reubicará en otra finca⁴⁴. Si bien el expediente de la finca contiene información sobre este hecho, en el seno de la junta directiva pasó desapercibido, al menos en la documentación revisada. En todo caso, solo unos meses después del reclamo de los campesinos, el instituto aprobó la compra de la finca a su dueño original. Incluso en esa circunstancia, luego de años de disputas y negociaciones, un directivo del instituto mencionaba que, en dicha propiedad: «se podía programar algo interesante desde el punto de vista forestal y conservacionista, porque le parece que hay un organismo internacional interesado en la ampliación del Parque Nacional Guanacaste»⁴⁵.

Este episodio, aunque puntual, reveló las fricciones existentes entre la política de tierras y la política de conservación de bosques del Estado costarricense. Desde la perspectiva del conservacionismo dominante (cuando menos de aquel representado por el científico cuestionado por los campesinos), los asentamientos campesinos y la política de tierras en general eran obstáculos para la creación y la protección de las áreas protegidas. Las tierras de Paso Bolaños, de acuerdo con la autoridad y la «moral científica» que estaba detrás de este tipo de conservacionismo, no eran de uso agrícola, sino de «uso forestal»⁴⁶. Resulta simbólico que, en su defensa, los campesinos subrayaran la «función social» del asentamiento posiblemente como una respuesta y una forma de resistencia ante el peso de dicha autoridad y moral. Esta fue otra situación laberíntica para el Estado costarricense. En medio de una década de crisis económica y social, y con una guerra civil sucediendo en Nicaragua, la política de tierras y la de conservación de bosques eran bastiones del «posicionamiento territorial» de dicho estado en la frontera con el vecino país del norte. Y, aunque el conservacionismo ganaba cada vez más peso e influencia ante el Estado y la sociedad costarricense, la guerra civil había motivado una estrategia agresiva de creación de asentamientos campesinos, mejoramiento de caminos e infraestructura en general a todo lo largo de la frontera con Nicaragua, en busca de levantar una «barrera territorial» ante el conflicto armado centroamericano (IDA 1989a; IDA 1989b). Situados a solo 50 y 30 kilómetros de la frontera

43. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 275.

44. ITCO-IDA, Expediente de Ocupación Precaria N. 877, San José, Costa Rica, f. 277. Allen (2001) confirma las compras en dicha zona, aunque ofrece una lectura distinta, positiva y favorable, en cuanto a la estrategia de expansión, así como de la relación con los habitantes locales (Allen 2001: 108-109, 117-118).

45. IDA, Acta de la Junta Directiva, N. 02687 (Artículo sexto), 7 de abril de 1987, s.p.

46. Véase un ejemplo semejante en: «ITCO empezó a arrasar el único bosque tropical seco del país», *La Nación*, 25 de abril de 1979, 1A-4A.

con Nicaragua, el Parque Nacional Santa Rosa y Paso Bolaños formaban parte de este ajedrez geopolítico, no exento de contradicciones.

5. LOS EXPERTOS Y LA RESIGNIFICACIÓN «MORAL» DEL CAMPESINO

El valor explicativo de los anteriores casos radica en su naturaleza espontánea. Las notas de prensa, las actas de las juntas directivas y los expedientes de finca fueron manifestaciones reactivas y documentaron las «primeras voces» tras la ocurrencia de los hechos. Como fue dicho antes, estas fuentes demostraron el carácter anticampesinista detrás de las políticas forestales del ITCO, así como del conservacionismo de las décadas de 1970 y 1980. Ahora bien, ¿era excepcional esta posición en contra del campesinado? En esta sección analizaremos un material distinto el cual, antes que reactivo en lo inmediato, es reflexivo en lo mediato, vinculado con un tercer actor en la trama de este artículo. Son lenguajes de valoración y esquemas explicativos presentes en informes y artículos científicos acerca de la deforestación y la conservación de bosques en Costa Rica, escritos por funcionarios, académicos y expertos en general (nacionales y extranjeros) entre las décadas de 1980 y 1990. Nuestro objetivo es demostrar que estos lenguajes y esquemas, en conjunto con las políticas y prácticas estatales en torno a la tierra y la conservación de bosques, contribuyeron a la construcción semántica del «campesino antiecológico», entendiendo este proceso como un ejercicio de resignificación «moral».

Durante el auge de la deforestación y del conservacionismo, en el «discurso experto», el campesino constituía el elemento principal de un «ciclo vicioso». Weinberg (1991: 22), al analizar la expansión de la agricultura campesina en los bosques del Caribe de Centroamérica, consideraba que dicho proceso era un «desastre». El asentamiento de los campesinos era exitoso durante el primer y segundo año cuando, aprovechando la fertilidad de los suelos, las cosechas eran altas. Sin embargo, una vez que los nutrientes se agotaban, caían los rendimientos y los campesinos no tenían más opción que abandonar sus «milpas»⁴⁷ y talar más bosque para reiniciar el ciclo.

El rol del campesino era valorado según tres fases distintas en el citado «desastre». La primera fase refiere al momento de la toma de la tierra en una zona de frontera agrícola, en una reserva del Estado o en una finca privada. En este caso, el campesino era calificado como un «invasor» o un «parásito» quien, fuera de la ley, se apropiaba de la tierra. La connotación de «parásito», con una especial carga negativa, era comúnmente utilizada en la época como equivalente de «precarista» tanto en la prensa como en documentos oficiales (IICA 1969: 2.1.2-5; PROCCARA 1975: 153). El campesino era equiparado con un «agente desestabilizador», que alteraba el derecho a la propiedad privada de los finqueros. En 1990 un investigador señalaba,

47. Se refiere a sembradíos de maíz en regiones de ladera y con variedades «criollas», usualmente combinados, en sucesión, con el cultivo de frijol.

en un estudio sobre la tierra en el Caribe de Costa Rica, que «Para los precaristas no era fácil levantar una finca en esas condiciones; estaban en peor situación que los ocupantes, porque se les consideraba como parásitos y se les acusaba de comunistas» (Wielemaker 1990: 82). Los «precaristas» o «parásitos» formaban parte de un proceso con una lógica «espontánea», inversa en valor a la planificación desarrollista, tecnocrática y ordenada desde el Estado. De este modo, la colonización espontánea era contemplada como un proceso desfasado en el tiempo; el resultado de una «cultura de la frontera», la cual legitimaba la acción del «invasor» (Brockett y Gottfried 1991: 14)⁴⁸.

En la segunda fase, ya asentado en la tierra, el campesino era un «agente deforestador», así como uno «improductivo» y «especulador». Un industrial maderero en la década de 1980 reclamaba que «Los campesinos no solo corrientemente usurpan terrenos con plantaciones agrícolas tradicionales, sino que se especializan en destruir irracionalmente nuestros bosques» (Citado por: Rodríguez y Vargas 1988: 34). Además, el campesino, al talar y quemar el bosque, provocaba la pérdida de fertilidad del suelo y convertía su finca en una tierra «improductiva». Ante esto, se transformaba en un «especulador» que vendía la finca a otros campesinos, al propio Estado gracias a las «mejoras» introducidas, o bien, simplemente la abandonaba para buscar nuevas tierras en otros frentes de colonización o de ocupación precaria. Esta última acción parecía en absoluto consciente y estratégica por parte de los campesinos, como lo interpretaban Ramírez y Baltodano (1988: 88): «[...] los especuladores se desplazan hacia las zonas boscosas esperando que se les pague por «las mejoras» que han hecho (p.e., cortar la vegetación natural), o sin saber que hay un área protegida cercana, hasta colaboran para que la finca les sea comprada por parte del Estado»⁴⁹.

En la tercera fase el campesino era etiquetado como un agente «despilfarrador», «irracional» e «impune». Como lo argumentaba Weinberg, el campesino estaba «condenado» a participar del «ciclo vicioso» de talar el bosque, degradar los suelos y migrar de nuevo en busca de tierra. Para estos expertos, el campesinado parecía no estar al tanto de ello. Solamente tomaba la decisión de «abandonar la tierra», dejando atrás «suelos exhaustos» y «tierra estéril» (Weinberg 1991: 22; Carrière 1991: 151). Y luego marchaba con la posibilidad del premio derivado del pago por «las mejoras» introducidas a la propiedad, las que equivalían, según los expertos, a la «destrucción» del bosque (Brockett y Gottfried 1991: 14). Por ello su acción era «irracional» al no tomar en cuenta los efectos sociales y ambientales. En 1990, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas de Costa Rica advertía que, a pesar de que muchas de las tierras por colonizar no eran aptas para usos que no fueran la protección de los recursos hídricos, escénicos o la

48. La carga negativa sobre la colonización (espontánea o dirigida por el Estado) es un tema recurrente en este tipo de literatura. Véase: Brenes (1989: 165); Evans (1999: 42); Schelhas y Pfeffer (2008: 29) y Rosero-Bixby y Palloni (1998: 176).

49. Véase también: Umaña (1987: 32) y Fournier (1991: 71).

biodiversidad: «[...] continúa la presión por colonizar nuevas áreas, sin considerar los altos costos sociales, económicos y ambientales» (Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas 1990). No solo era la inconsciencia por parte de los campesinos lo que era grave, sino también la impunidad y la falta de castigo ante sus acciones. En 1983, un informe científico reclamaba que «los precaristas siguen invadiendo impunemente tanto tierras públicas como particulares» (Citado por: Rodríguez y Vargas 1988: 33).

Dos aspectos destacan del análisis de estos lenguajes de valoración y marcos explicativos. En lo que respecta al lenguaje, sobresale la carga negativa de la adjetivación realizada sobre el campesino: desde aquella que lo identificaba como «parásito», hasta otras asociadas con su propensión a especular con la tierra, o su acción como «deforestador». Era una definición moral en el sentido que la selección de los descriptores (adjetivos), en forma consciente o no, etiquetaba y marcaba al campesino como una figura que no calzaba con las normas de uso de la tierra o de conservación de bosques, social y políticamente legitimadas por el Estado y el conservacionismo de la época. En cuanto a los marcos explicativos, conviene subrayar una contradicción en el material examinado: el campesino era, al mismo tiempo, irracional y racional. En el plano individual, si bien talaba el bosque y originaba el «ciclo vicioso», bajo un comportamiento inconsciente e irracional, en el plano colectivo, como grupo social, para estos expertos su acción tenía una racionalidad coherente, con patrones semejantes en diferentes regiones de Costa Rica y de América Latina (Tosi 1980: 2). Dicho en otras palabras, para aquellos, el impacto ambiental del campesino no era solamente la suma de sus acciones individuales como «precaristas» o «parásitos», sino más bien, el campesinado era una gran fuerza sociodemográfica de impacto ecológico, que compartía prácticas y patrones de destrucción de los recursos, en diversas realidades sociales y ecológicas, como si se tratara de un *Homo Anti Ecologicus*.

En las décadas de 1980 y 1990 era evidente que la deforestación tenía múltiples causas. La mayor parte de los estudios incluidos en este balance contienen datos e interpretaciones que trataban de mostrar dicha situación. La preocupación pública por el tema había incentivado la investigación académica mediante la publicación de no pocos informes y artículos científicos. En dichas décadas, fue significativa la literatura escrita acerca de la relación entre la ganadería, la expansión de los pastizales y la exportación de carne a los Estados Unidos, teniendo al latifundio como eje de este sistema extractivo (Myres 1981; Williams 1986; Myres *et al.* 1987). De la misma forma, fueron escritos trabajos señeros sobre el desarrollo del mercado maderero en Costa Rica y su relación con la tala del bosque (Rodríguez y Vargas 1988), entre otros temas afines. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la complejidad de la deforestación como proceso socioecológico, persistió la culpabilización del campesinado, lo que es sorprendente cuando dicha percepción provenía de funcionarios, académicos y expertos. ¿Era un anticampesinismo surgido de una situación de privilegio en el sistema social y político, ostentada por dichos académicos y expertos?, ¿Era una posición «clasista»? En ninguno de los

sistemas causales antes indicado (ganadería/deforestación y mercado maderero/deforestación), el campesino de frontera y el «precarista» tenían una posición de control o poder, o mejor dicho, de incidencia en modo alguno. El campesino era el actor más débil y vulnerable del sistema, resistente en su lucha pero sin poder económico y político en su cuenta. ¿Acaso esta precariedad explicaba en esta coyuntura su papel antiecológico, casi delictivo?⁵⁰

6. CONCLUSIONES

Los casos estudiados en este artículo revelan las contradicciones sociales e institucionales bajo las cuales surgieron la política de tierras y de conservación de bosques en Costa Rica. A partir de la década de 1960, la protección de los bosques fue gestionada desde instituciones de corte agrarista como el ITCO y luego el MAG. No fue sino hasta la década de 1970 cuando el conservacionismo empezó a ganar identidad institucional mediante la creación de departamentos y sistemas dedicados a la gestión de los parques nacionales. La difusa línea que separaba, en todos los sentidos (incluido el territorial), al agrarismo del conservacionismo, deparó continuas tensiones entre unos y otros a lo largo de las décadas de 1970 y 1980. El propio ITCO estuvo envuelto, en sus primeros años, en situaciones críticas debido a su doble condición de distribuidor de tierra entre campesinos desposeídos, y cuidador de las reservas forestales del Estado y, en consecuencia, represor de los «precaristas» allí asentados.

En el marco de estas contradicciones y tensiones, el campesino de frontera agrícola o el «precarista», fue el gran perdedor. Este representaba el eslabón más débil de la cadena por lo que fue el blanco perfecto para ser «culpabilizado» por la elevada tasa de deforestación que mostraba el país en dichos años. Fue de este modo etiquetado como un «agente antiecológico» no solo por los funcionarios públicos y la prensa nacional, sino también incluso por académicos y expertos. La revisión de fuentes primarias, tanto como secundarias, ha documentado el proceso de configuración moral del campesino como un «antimodelo», el cual obstaculizaba el proyecto conservacionista que el Estado había asumido desde la década de 1970. Finalmente, los calificativos negativos, recurrentes en notas de periódicos, informes y artículos científicos, hacen pensar que estos campesinos experimentaron un *déjà vu* generacional: mientras que unos años antes habían sido juzgados por los economistas y agrónomos por ineficientes y resistentes a la modernización tecnológica, ahora eran nuevamente juzgados por los conservacionistas por ser deforestadores y destructores de la naturaleza, carentes de conciencia ecológica.

50. Para un ejemplo de prácticas estatales de criminalización y de «despojo» en comunidades afrodescendientes en el Brasil contemporáneo, véase: Bowen (2021).

7. BIBLIOGRAFÍA

- ALLEN, William (2001): *Green Phoenix. Restoring the Tropical Forest of Guanacaste, Costa Rica*. Nueva York: Oxford University Press.
- ÁLVAREZ-SOLAR, María (2013): «Costa Rica y el atentado de La Penca (1984)». *Diálogos Revista Electrónica de Historia*, 13/2, pp. 68-91.
- ARTAVIA VÍQUEZ, Luis F. (2008): *Delimitación efectiva de parques nacionales, un caso de estudio: Parque Nacional Barra Honda, Costa Rica*. Tesis de Licenciatura en Geografía, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
- AVIRGAN, Tony y HONEY, Martha (1989): *John Hull: el finquero de la CIA*. San José, Costa Rica: Varitec.
- BARAHONA, Francisco (1980): *Reforma agraria y poder político*. San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica.
- BERNSTEIN, Henry y BYRES, Terence J. (2001): «From Peasant Studies to Agrarian Change». *Journal of Agrarian Change*, 1/1, 1-56.
- BESS, Michael K. (2021): «Steering Latin America's Economic Relationship with the United States» en BARAHONA, Ana. (eds) *Handbook of the Historiography of Latin American Studies on the Life Sciences and Medicine*. Springer: Cham.
- BOZA, Mario (1993): «Conservation in Action: Past, Present, and Future of the National Park System of Costa Rica». *Conservation Biology*, 7/ 2, pp. 239-247.
- BOZA, Mario (2015): *Historia de la conservación de la naturaleza en Costa Rica, 1754-2012*. Editorial Tecnológica: Cartago, Costa Rica.
- BOZZOLI, María Eugenia (1977): «Comentario de la Dra. María Eugenia Bozzoli», en *La Costa Rica del año 2000*. San José, Costa Rica: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, pp. 567-576.
- BOWEN, Merle. (2021). *For Land and Liberty: Black Struggles in Rural Brazil*. Nueva York: Cambridge University Press.
- BRENES, Carlos. «¿Desarrollo forestal campesino?» en HEDSTRÖM, Ingemar (ed.), *La situación ambiental en Centroamérica y el Caribe*. San José, Costa Rica: Departamento Ecueménico de Investigaciones, pp. 163-174.
- BROCKETT, Charles D. y Gottfried, Robert R. (2002): «State Policies and the Preservation of Forest Cover: Lessons from Contrasting Public-Policy Regimes in Costa Rica». *Latin American Research Review*, 37/1, pp. 7-40.
- CARRIÈRE, Jean (1991): «The Political Economy of Land Degradation in Costa Rica». *International Journal of Political Economy*, 21/1, pp. 10-31.
- CRUZ, Vernon (1975): *Administración del Parque Nacional Santa Rosa*. Práctica presentada a la Facultad de Agronomía para optar por el Grado de Ingeniero Agrónomo, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
- DAYTON, William A. (1944-1945): «Copey Oak in Costa Rica». *Agriculture in the Americas*, 4/5, pp. 134-135.
- DE LEÓN, Arnoldo (1986): *Plan de manejo Reserva forestal Río Macho*. Turrialba, Costa Rica: CATIE.
- EVANS, Sterling (1999): *The Green Republic. A Conservation History of Costa Rica*. Austin: The University of Texas Press.
- FAO (1981): *Identificación de alternativas concretas para el desarrollo forestal de la Zona Norte*. Roma: FAO.
- FOURNIER, Luis (1991): *Desarrollo y perspectivas del movimiento conservacionista costarricense*. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

- GERBER, Julien F. y VEUTHEY, Sandra (2010): «Plantations, Resistance and the Greening of the Agrarian Question in Coastal Ecuador». *Journal of Agrarian Change*, 10/4, pp. 455-481.
- GRIFFIN, Carl, JONES, Roy y ROBERTSON, Iain (2019): *Moral Ecologies. Histories of Conservation, Dispossession and Resistance*. Palgrave Studies in World Environmental History. Cham, Suiza: Springer Nature.
- GRUPO CENTROAMERICANO DE TENENCIA DE LA TIERRA Y DESARROLLO RURAL (1969): *Costa Rica: tenencia y uso de la tierra*. San José, Costa Rica: Programa de Capacitación Campesina para la Reforma Agraria.
- ICE (1959): *Estado de situación del plan de electrificación de Costa Rica. y naturaleza de la electrificación en Costa Rica*. Documento preparado para el Seminario de electrificación centroamericana, El Salvador: CEPAL-Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano de Electrificación.
- IICA (1969): *Seminario Nacional de Reforma Agraria para Parlamentarios y Dirigentes Políticos*. San José, Costa Rica: Asamblea Legislativa-ITCO-IICA, p. 2.1.2-5.
- IDA (1989a): *Informe de las principales labores de la institución*. Período mayo 1988-abril 1989. San José, Costa Rica: IDA.
- IDA (1989b): *Proyecto Zona Norte. Información básica*. San José, Costa Rica: IDA.
- ITCO (1964): *Memoria anual 1963*. San José, Costa Rica: Instituto de Tierras y Colonización.
- ITCO (1965): *Memoria 1964*. San José, Costa Rica: Instituto de Tierras y Colonización.
- ITCO (1966): *Memoria Anual 1965*. San José, Costa Rica: Instituto de Tierras y Colonización.
- ITCO (1966): *Proyecto de colonización Chambacú*. San José, Costa Rica: Instituto de Tierras y Colonización.
- ITCO (1966): *Resumen de proyectos de colonización Alfredo González Flores, Cariari, Coto Brus, Cubujuquí, Chambacú*. San José, Costa Rica: ITCO.
- ITCO (1967): *Memoria Anual 1966*. San José, Costa Rica: Instituto de Tierras y Colonización.
- ITCO (1969): *Memoria Anual 1968*. San José, Costa Rica: Instituto de Tierras y Colonización.
- ITCO (1977a): *Labor realizada por el I.T.C.O a 1976*. Informe estadístico. San José, Costa Rica: ITCO.
- ITCO (1977b): *Proyecto industrial forestal para Sabogal, Reserva de Chambacú*. San José, Costa Rica: ITCO.
- JACOBY, Karl (1997): «Class and Environmental History: Lessons from “The War in the Adirondacks»». *Environmental History*, 2/3, pp. 324-42.
- JACOBY, Karl (2001): *Crimes against Nature: Squatters, Poachers, Thieves and the Hidden History of American Conservation*. Berkeley: University of California Press.
- JANZEN, Daniel (1988): *Guanacaste National Park: Tropical Ecological And Cultural Restoration*. San José, Costa Rica: UNED.
- KAPPELLE, Maarten (1996): *Los Bosques de Roble (Quercus) de la Cordillera de Talamanca, Costa Rica. Biodiversidad, ecología, conservación y desarrollo*. Heredia, Costa Rica: INBIO.
- KRUIJT, Dirk (2011): «Revolución y contrarrevolución: el gobierno sandinista y la guerra de la Contra en Nicaragua, 1980-1990». *Desafíos*, 23/2, pp. 53-81.
- LOMBO, Ricardo (1963): *Contribución para un plan de manejo de la cuenca superior del Río Macho, Costa Rica*. Tesis presentada al Consejo de la Escuela de Graduados como requisito parcial para optar al grado de Magister Agriculturae. Turrialba, Costa Rica: IICA.
- LÓPEZ, Maximiliano y GRANADOS, Roberto (2016): «Desnudando el mito: Un balance sobre las tensiones del modelo de conservación en Costa Rica (1970-2015)». *Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC)*. *Revista de la Solcha*, 6/1, pp. 61-85.

- MAG (1973): *El MAG y la sequía en el Pacífico Seco*. San José, Costa Rica: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- MOLINA, Iván (2014): *La cicatriz gloriosa: Estudios y debates sobre la Campaña Nacional: Costa Rica (1856-1857)*. San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica.
- MORA, Jorge (1990): La distribución de la tierra y los asentamientos humanos en Costa Rica, en FAO, *Centroamérica y los problemas del desarrollo en el campo*. Santiago de Chile: FAO, pp. 61-107.
- MYRES, Norman (1981): «The Hamburger Connection: How Central America's Forests Became North America's Hamburgers». *Ambio. A Journal of the Human Environment*, 10, pp. 3-8.
- MYERS, Norman y TUCKER, Richard (1987): «Deforestation in Central America: Spanish Legacy and North American Consumers». *Environmental Review*, 11/1, pp. 55-71.
- MUÑOZ GUILLÉN, Mercedes (1999): «Narcotráfico, democracia y soberanía nacional en Costa Rica». *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 25/2, pp. 33-47.
- PARSONS, James (1976): «Forest to Pasture: Development or Destruction?». *Revista de Biología Tropical*, 24, pp. 121-138.
- PEDRONI, Lucio (1991): *Sobre la producción de carbón en los robledales de altura de Costa Rica*. Turrialba, Costa Rica: CATIE.
- PÉREZ, Samuel y PROTTI, Fernando (1978): *Comportamiento del sector forestal durante el período 1950-1977*. San José, Costa Rica: Oficina de Planificación Sectorial Agropecuaria.
- PORRAS, Anabelle y VILLARREAL, Beatriz (1993): *Deforestación en Costa Rica. Implicaciones sociales, económicas y legales*. San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica.
- PROCCARA (1975): Tenencia de la tierra y desarrollo rural en Centroamérica. Tegucigalpa, Honduras: INA.
- RAMÍREZ, Alonso y MALTODANO, Tirso (1988): *Desarrollo socioeconómico y el ambiente natural de Costa Rica. Situación actual y perspectivas*. San José, Costa Rica: Fundación Neotrópica.
- RIVERA, Roy (1986): *La política de distribución de tierras en Costa Rica: El caso de las cooperativas parcelarias de la Región Oriental del valle Central*. San José, Costa Rica: Editorial Alma Mater.
- RODRÍGUEZ, Silvia y VARGAS, Emilio (1988): *El recurso forestal en Costa Rica. Políticas públicas y sociedad*. Heredia, Costa Rica: Editorial de la Universidad Nacional.
- ROSETO-BIXBY, Luis y PALLONI, Alberto (1998): «Population and Deforestation in Costa Rica». *Population and Environment*, 20/2, pp. 149-185.
- ROWLES, James P. (1982): «Law and Agrarian Reform in Costa Rica: The Legislative Phase». *Lawyer of the Americas*, 14/2, pp. 149-257.
- ROYO, Antoni (2003): «La Reforma Agraria en Costa Rica (1962-2002): Balance de las intervenciones estatales en el cantón de Osa». *Revista de Historia*, 48, pp. 227-269.
- SANDNER, Gerard. y NUHN, H. (1986): *Estudio geográfico regional de la zona norte de Costa Rica*. San José, Costa Rica: ITCO.
- SALAZAR N., José M.; RODRÍGUEZ, Ennio y SALAZAR X., José M. (1977): *Costa Rica: una política agraria innovadora*. San José, Costa Rica: ITCO.
- SCHELHAS, John y PFEFFER, Max (2008): *Saving Forest, Protecting People? Environmental Conservation in Central America*. Lanham, EE.UU: Altamira Press.
- SELIGSON, Mitchell A. (1978): «La Reforma Agraria en Costa Rica, 1942-1976: La evolución de un programa. *Estudios Sociales Centroamericanos*», 7/19, pp. 55-82.
- SERRANO, Carlos (1976): *Historia de la Carretera Interamericana*. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

- TOSI, Joseph A. (1976): «Transformación del bosque en pastizal: ¿desarrollo o destrucción?». *Revista de Biología Tropical*, 24, pp. 139-141.
- TOSI, Joseph A. (1980): *Desarrollo forestal del Trópico americano frente a otras actividades económicas*. Turrialba, Costa Rica: CATIE.
- UMAÑA, Álvaro (1987): «La colonización agropecuaria y deforestación en Costa Rica». *Revista Abra*, 7/8, pp. 29-34.
- VILLARREAL, Beatriz (1983): *El precarismo rural en Costa Rica, 1960-1980: orígenes y evolución*. San José, Costa Rica: Editorial Papiro.
- VILLARREAL, Beatriz (1992): *Precarismo, campesinado y democracia*. San José, Costa Rica: FLACSO.
- WALLACE, David R. (1992): *The Quetzal and the Macaw. The Story of Costa Rica's National Parks*. San Francisco: Sierra Club Books.
- WEINBERG, Bill (1991): *War on the Land. Ecology and Politics in Central America*. New Jersey: Zed Books.
- WIELEMAKER, W. G. (ed) (1990): *Colonización de las Lomas de Cocorí: deforestación y utilización de los recursos de tierra en la Zona Atlántica de Costa Rica*. Turrialba, Costa Rica: CATIE-MAG-Wageningen University.
- WILLIAMS, Robert G. (1986): *Export Agriculture and the Crisis in Central America*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

